



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Abril veintiuno 21 de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001- 31- 05-**016-2018-00704-01**
Demandante: ANA JOVINA SÁNCHEZ DE JIMÉNEZ
Demandada: COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: COSA JUZGADA – INTERESES DE MORA

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Decisión que se emite de manera escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 2020.

En los términos de la escritura pública y la sustitución de poder allegada (fls. 93 y 94), se reconoce personería para representar los intereses de Colpensiones al abogado DEIVID ALEJANDRO OCHOA PALACIO con T. P. 307.794 del C. S. de la J.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende el reconocimiento y pago de los intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993, por cuanto los mismos no fueron reconocidos en la resolución GNR 12719 del 16 de enero de 2016, mediante la cual COLPENSIONES le reconoció y

pagó las mesadas retroactivas causadas desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de agosto de 2015. Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de las costas del proceso.

El *a quo*, tras considerar que en el proceso ejecutivo de radicado 050013105005200701118 se declaró oficiosamente probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora; negó la totalidad de las pretensiones incoadas en contra de COLPENSIONES, tras declarar probada la excepción de cosa juzgada bajo el argumento de haberse resuelto de fondo la causación de intereses de mora al interior del precedente proceso. Finalmente, impuso condena en costas a cargo de la activa en la suma de \$1'000.000.

La parte demandante aspira a que se revoque la decisión de primera instancia, pues a su criterio, no es posible declarar la procedencia de la excepción de cosa juzgada, ya que la negativa del reconocimiento y pago de intereses moratorios se presentó al interior de un proceso ejecutivo, cuando los mismos se deben de analizar es en un proceso declarativo como es el presente caso.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que trata el decreto 806 de 2020, la parte demandante solicita sea revoque la decisión de primera instancia, en la medida que los intereses de mora están siendo solicitado en un proceso declarativo, ya que *“una cosa es que se ordene su pago mediante proceso ejecutivo cuando ya han sido reconocidos y ora cosa muy diferente es que se solicite el reconocimiento mediante proceso declarativo”*.

Por su parte, de manera sucinta y sin exponer argumento adicional, COLPENSIONES solicita la confirmación de la decisión proferida en primera instancia.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver la controversia, encuentra la Sala pertinente expresar que, en el presente asunto, a partir de las pruebas aportadas al proceso, se encuentran por fuera

de discusión los siguientes presupuestos fácticos: *i)* Que el 11 de abril de 2006 la demandante solicitó el reconocimiento de una pensión de vejez, la cual le fue reconocida por el extinto ISS mediante resolución N° 015303 de 2006 a partir del 1 de julio de 2006, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (fl 8); *iii)* Que por providencia del 18 de mayo de 2009, el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en favor de la demandante por las mesadas pensionales desde el 1 de julio de 2006 hasta la inclusión en nómina, por los intereses e mora liquidados a la máxima tasa permitida por la Superfinanciera desde el día en que la obligación se hizo exigible y por las costas del proceso ejecutivo (fls. 34 a 35) *iii)* que, por audiencia del 25 de junio de 2014, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso referido en el punto anterior, decidió las excepciones formuladas, resolviendo, entre otros asuntos, declarar oficiosamente probada la excepción de inexistencia de los intereses de mora, lo cual fue confirmado por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín mediante audiencia del 23 de julio de 2015 (fls. 81 a 85 y 29 a 33) y *iv)* que por auto del 4 de noviembre de 2015, el juzgado 5 Laboral del Circuito de Medellín ordenó el pago de depósito judicial constituido en el proceso ejecutivo referido, la terminación del proceso por pago total de la obligación y el archivo del expediente (fl 32 vto (resolución SUB 82716 del 27 de marzo de 2018).

En este orden de ideas y en virtud del principio de congruencia, le corresponde a esta Corporación determinar: **1)** establecer la existencia del fenómeno de la cosa juzgada entre la actual demanda y aquella adelantada bajo el radicado 050013105005200701118. En caso de no existir cosa juzgada; **2)** Si hay lugar a reconocer los intereses de morar del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solicitado en la demanda.

Pues bien, como presupuesto jurídico es relevante el artículo 303 del C.G.P según el cual la sentencia proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, sin que pueda emitirse otra decisión en un nuevo proceso que verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes, aspectos al ser analizados en los procesos que acá se comparan permiten concluir que **no hay identidad de objeto**, pues partiendo de la naturaleza misma de los procesos

ordinarios y ejecutivos, se tiene que, de manera sucinta, el primero de ellos busca declarar un derecho y en el segundo se busca hacer cumplir una obligación clara expresa y exigible. Bajo ese sentido, al analizar el trámite adelantado al interior del proceso ejecutivo 050013105005200701118, al momento de resolverse lo relativo a los intereses de mora, la juez de instancia en la parte motiva de la providencia obrante a fls. 81 a 84 estableció:

“Finalmente advierte el despacho que en auto del 18 de mayo de 2009 (fl. 06-09) fue además librado mandamiento de pago por los intereses moratorios liquidados a la máxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera, desde el día en que la obligación se hizo exigible y hasta el día de pago total de la obligación, sin embargo considera el despacho que no existe título ejecutivo, por lo que menos dentro del presente trámite, que permita concluir que a favor de la actora y a cargo de la entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida, existe la obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar intereses de mora.

Lo anterior si se tiene en cuenta que la Resolución N° 015303 de 2006 (fl. 04-05) no se hace mención alguna al reconcomiendo de intereses demora y que no obra ningún otro elemento demostrativo que permita inferir de dicha obligación.

Además en la demanda ejecutiva no se describe el aparte normativo que dispone el reconocimiento de los intereses reclamados, pero atendiendo a que en el área laboral dichos intereses solo han sido regulados para la mora en el pago de cotizaciones al sistema (artículo 23 Ley 100 de 1993), para el pago tardío de las mesadas pensionales según el (artículo 141 ibidem) y para el retraso en el pago de salario y prestaciones sociales (artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo), infiere el despacho que la atora pretende el reconocimiento de los dispuestos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Sin embargo lo cierto es que el reconocimiento de tales intereses no pueden ser objeto del presente trámite ejecutivo ya que por su naturaleza no atiende pretensiones declarativas, por lo que para que proceda la ejecución es necesario que sobre los intereses reclamados ya se hubiera ordenado su reconocimiento, vía judicial o la administrativa.

Entonces lo procedente será declarar oficiosamente la prosperidad de la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios”

Ahora, pese a que no fue aportado el audio de la diligencia celebrada el 23 de julio de 2015 por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, del contenido de la resolución SUB 82716 del 27 de marzo de 2018 (fls. 29 a 30), se concluye que esta determinación no fue objeto de modificación por esta corporación, pues en dicha resolución se lee:

*“Que el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA SEXTA LABORAL mediante fallo de fecha 23 de julio de 2015, declaro abierta la audiencia del proceso en la cual no asisten las partes ni los apoderados y sin costas en esta instancia, **confirmo la decisión de declarar oficiosamente probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios**, se revocó la decisión de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, y en su lugar se ordeno seguir adelante con la ejecución por el valor de las mesadas pensionales causadas a partir del 01 de julio de 2006 y hasta la fecha en que se efectuó la inclusión en nomina de la prestación pensional reconocida”*

(aparte subrayado por la Sala)

De lo anterior se concluye que la causación de intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de debate al interior del proceso 050013105005200701118, y que la declaratoria de su improcedencia obedeció, no a su eventual causación, sino por la falta del título ejecutivo que respaldara su pago mediante ese proceso, siendo por ello entonces necesario revocar la decisión de primera instancia, para que en su lugar, sea analizada la eventual procedencia de los intereses de mora pretendidos con la demanda.

Sobre la **causación de los intereses de mora**, señala la Sala que en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se reconocen en los eventos de retraso en el pago de las mesadas pensionales, iniciando su cómputo, una vez vencido el término de que trata el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que se concede a la entidad administradora de pensiones para pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez y el cual es de 4 meses.

Al respecto, se tiene que a la demandante le fue reconocida la pensión de vejez mediante resolución N°015303 de 2006 a partir del 1 de julio de 2006 (fl 8), no obstante, posterior a ello el actuar de la demandada estuvo encaminada a dejar sin efecto el citado acto administrativo, por lo que no dio cumplimiento a ello y por el contrario, del contenido de la resolución SUB 82716 del 27 de marzo de 2018, se evidencia que fue presentado proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por el extinto ISS contra la demandante, cuyo radicado era 05001-33- 31-008-2008-300-0, donde la parte actora pretendía que se declarara la nulidad total de la resolución por medio de la cual se reconoció la prestación de vejez a la actora, lo cual fue despachado

de manera desfavorable a la demandada por medio de sentencia dictada por el Juzgado 3 Administrativo de Descongestión de Medellín el 30 de agosto de 2013, por lo que no encuentra la Sala justificación alguna por parte del extinto ISS, hoy COLPENSIONES, en reconocer la prestación por vejez a la actora, lo cual solo ocurrió hasta el 1 de julio de 2014 según resolución GNR 219801 del 16 de junio de 2014 obrante a fls. 14 a 17, la certificación visible a fl. 18 del expediente y la confesión realizada en el hecho décimo segundo de la demanda (fl. 42).

Pese a ello, el retroactivo pensional causado desde el 1 de julio de 2006 solo fue cancelado con ocasión a las resultas del proceso ejecutivo adelantado al interior del Juzgado 5 Laboral del Circuito de Medellín bajo radicado 050013105005200701118, en cumplimiento de la medida cautelar de embargo proferida el 14 de septiembre de 2015 (fl. 32 ver contenido de resolución SUB 82716 del 27 de marzo de 2018).

Esta circunstancia permite inferir que la reclamante al 1 de julio de 2006 satisfacía los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por lo que la negativa del derecho por parte de la pasiva fue injustificada, siendo entonces procedente el reconocimiento de los intereses de mora. Ahora, si bien la activa reclamó el reconocimiento de la prestación el 11 de abril de 2006, según la resolución N°015303 de 2006, fue solo a partir del 1 de julio de 2006 que causó el derecho a la prestación, por lo que los 4 meses de plazo para el pago de la prestación se contarán a partir de la causación del derecho, lo que lleva a concluirse que los intereses de mora se causaron a partir del 1 de noviembre de 2006.

Ahora bien, desconoce la sala la fecha en la que se hizo efectivo el embargo decretado por auto del 14 de septiembre de 2015 dictado al interior del proceso ejecutivo atrás mencionado, no obstante, teniendo en cuenta que la parte activa confiesa en el hecho “VIGÉSIMO (fl42)”, que el 5 de octubre de 2015 se había cancelado el título judicial producto de la medida cautelar, la sala tomará como extremo final de la causación de los intereses de mora esta última fecha, es decir, el 5 de octubre de 2015.

Ha de advertirse que no operó el fenómeno de la prescripción por cuanto no trascurrió el periodo trienal del que tratan los artículos 488 CST y 151 del CPTSS, desde el momento en el que se extinguió la obligación principal (5 de octubre de 2015 pago del depósito judicial) y el momento en el que se interrumpió la proscripción (26 de enero de 2016 - fl 19 vto. resolución GNR 12719 de 2017) y entre esta última fecha y la de la presentación de la demanda (14 de noviembre de 2018 fl. 7)

Por lo anterior, adeuda COLPENSIONES a la demandante por concepto de intereses de mora la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$72.738.329)**, causados entre el 1 de noviembre de 2006 y el 5 de octubre de 2015, por el retardo en el pago de las mesadas comprendidas entre el 1 de julio de 2006 y el 31 de junio de 2014.

El valor de la condena deberá ser indexado, toda vez que con ello se pretende garantizar a la demandante que reciba lo que se le adeuda en su justo valor, sin desmedro de las consecuencias producidas por la inflación, que ocasiona el detrimento del valor de la moneda.

Finalmente, el COLPENSIONES habrá de asumir las **costas procesales** en ambas instancias por ser la parte vencida en juicio, sin mirar las causas de dicho resultado al ser una condena que se impone por ministerio de la Ley, conforme al art. 365 del Código General del Proceso.

Costas en ésta a cargo de COLPENSIONES, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV en favor de cada demandada.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL REVOCA TOTALMENTE** la sentencia de primera instancia apelada, para que en su lugar sean reconocidos los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Adeuda COLPENSIONES a la demandante la suma

de **SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$72.738.329)**, los cuales serán indexados al momento de su pago

Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES. En esta instancia en la suma de 2 SMLMV

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

Ausencia justificada

ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

Certifico que la anterior providencia fue notificada por ESTADOS N°_67 fijados por medios digitales el 22 de abril de 2021